

LA PRIVATIZACIÓN DE LO REAL

Hipótesis. En Washington, y por voz del secretario de Hacienda, el gobierno mexicano anunció que en 1997 acelerará el proceso de venta de empresas estatales, mismo que "había sido retrasado por cuestiones políticas" (*Reforma*, 30 de septiembre). Sin embargo, estas cuestiones siguen sin resolverse porque el marco político general en que se ha dado la privatización tiene problemas serios. Es posible que al final se proceda tal y como dice Guillermo Ortiz, pero entonces la "cuestión política" al privatizar la petroquímica, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, y almacenamiento y distribución de gas, va a tomar dimensiones mayores.

En el corazón de esa "cuestión política" a la que se refirió el secretario de Hacienda, esta la corrupción. En efecto, hoy es claro que los enemigos más efectivos de la legitimidad de la revolución privatizadora mexicana iniciada el decenio pasado no fueron los diversos grupos de izquierda -los malos resultados del estatismo en nuestro país y los peores del "socialismo real" en la Europa del Este, le restaron efectividad a sus argumentos de principio-, sino justamente algunos de los más entusiastas y doctrinarios partidarios de trasladar a la empresa privada los bienes productivos del Estado: lo propios tecnócratas. Hoy es generalizada la sospecha

-para no decir certeza- de que en la venta del patrimonio estatal, los vendedores aprovecharon su posición y la falta de control propia de un sistema de presidencialismo extremo, para sacar beneficio personal del proceso o, al menos, llevarlo por mal camino.

Como se recordará, el argumento en favor de la privatización es más o menos este: en las empresas del Estado, en casi cada una de ellas, ha dominado un espíritu que es la réplica exacta del que existía en la legendaria cueva de Alí Baba pero sin su eficiencia. Para sanearlas de verdad, hacerlas productivas y mantenerlas así, no había, se dice, otro camino que privatizarlas. Esa es la teoría, pero resulta -¿y podría haber sido de otra manera?- que en la "privatización real" la corrupción que se pretendía erradicar se introdujo en el proceso mismo y en sus resultados, y todo ello llevó a que, en términos generales, la venta de empresas públicas diste mucho de ser el éxito que pregonaba el manual del neoliberalismo. Hoy, el público ya no acepta tan fácilmente la idea de que privatizar es sinónimo de defender el interés nacional y menos de honestidad.

Lo anterior no es una mera suposición. Según los resultados de una encuesta de opinión pública que llevó a cabo el periódico *El Universal* en la Ciudad de México en la primera semana de marzo, sólo el 38.2 por ciento se oponían a la privatización de la petroquímica (18 de marzo), pero una encuesta hecha siete meses más tarde por *Reforma*, encontró que

apenas el 25 por ciento de los encuestados esta de acuerdo en que se venda la petroquímica, en tanto que el 64 por ciento se opone a ello (27 de setiembre). El mexicano promedio seguramente no es experto en el tema, pero dispone de sentido común y de ciertos datos que le permiten comprobar que las privatizaciones han hecho la fortuna de un puñado de favoritos del régimen y no han resultado en los beneficios colectivos que se prometieron.

Ejemplos. Veamos algunos casos de privatización, pero no en teoría sino en la realidad, como el de la siderúrgica en Lázaro Cárdenas-Las Truchas. Este gran ejemplo le costó al país alrededor de 1,200 millones de dólares, y en los años de Carlos Salinas una parte fue vendida a empresarios japoneses y otra a un hindú, Lakshami Mittal -personaje especializado en comprar barato lo que aparentemente no es productivo y hacerlo rentable rápidamente-. Mittal adquirió en 1992, y en sólo 220 millones de dólares, la empresa metalúrgica que exporta varilla y lingotes (la parte más contaminante del proceso) que en otro país se convierten en acero de alta calidad. Pues bien, en un sólo año, 1995, Mittal ganó con lo adquirido en Lázaro Cárdenas-Las Truchas 211 millones de dólares antes de impuestos y ya está expandiendo la planta (*Forbes*, 15 de junio, 1996, p. 131). ¡En un sólo año casi ganó lo que invirtió! La historia de Mexicana de Autobuses (MASA) no es muy distinta; en noviembre de 1989 Raúl Salinas, Abraham Zbludovsky y José Madariaga, compraron la empresa a Samuel Wigisser en 7.1 millón de

dólares, Wigisser, a su vez, la había adquirido del gobierno el año anterior en tan sólo 5.12 millones d dólares. Cuando Raúl Salinas y sus socios vendieron MASA en enero de 1993, lo hicieron por 48 millones de dólares ;un aumento de nueve veces en tan sólo cuatro años! (*Reforma*, 22 de julio). Si la privatización no ha beneficiado al conjunto de los mexicanos si lo ha hecho con algunos individuos, y mucho.

Ante privatizaciones como éstas, no queda más que una de tres explicaciones o una combinación: a) los privatizadores mexicanos son unos ineptos y prácticamente regalaron parte del patrimonio nacional, b) los privatizadores sabían bien el valor de lo que vendían, pero algo los convenció de vender barato, c) existía la posibilidad objetiva de mantener la acerera de Lázaro Cárdenas-Las Truchas o MASA como estatales y productivas, pero la ideología, las ganancias y la necesidad de conseguir todos los dólares posibles para el gran proyecto salinista -Solidaridad y el control de México más allá del año 2000- les hizo venderlas a cualquier precio.

Otro tipo de privatizaciones, tampoco ayudaron a legitimarlas. Y ahí esta el caso de la banca. En muy corto tiempo la irresponsabilidad de los nuevos dueños desembocó en una crisis mayúscula del sistema de crédito. Entre 1992 y 1994 el ritmo de crecimiento de los préstamos bancarios fue tal que dobló al de la economía en general, pero el "error de diciembre" y sus consecuencias frenaron la ola de crédito fácil e iniciaron la del cobro difícil: la de la insolvencia masiva

de crédito de tarjetas, hipotecarios, al consumo, etc. Hasta principios de este año, el gobierno había acudido al rescate de los banqueros con 126 mil millones de pesos, es decir, una suma superior en tres veces a la que el propio Estado recibió entre 1991 y 1992, cuando vendió las instituciones. Algunos de los nuevos banqueros, además de ineptos, resultaron unos pillos, como es el caso de Carlos Cabal Peniche (Cremi y Unión) o de Angel Rodríguez (Banpaís), alias el "Divino".

Hoy los bancos mexicanos han tenido que vender a los extranjeros parte de sus acciones y gastan más energía en cobrar que en prestar, lo que les hace un elemento disfuncional para la recuperación económica y para el proceso político mismo. En efecto, el esfuerzo de los bancos por cargar el peso de sus errores en los clientes, hizo que las filas de "El Barzón" -la organización de los deudores- se engrosaran con miembros de una clase media cansada de pagar platos rotos crisis tras crisis.

Es verdad que, en contraste con los ejemplos anteriores, se puede argumentar que, ya privados, Teléfonos de México ha aumentado la cobertura de su servicio e incluso su eficiencia, pero también es verdad que la empresa telefónica ha sido autorizada a aumentar, y mucho, el costo de sus servicios. Por otra parte, no está muy claro a donde fueron a parar los 1, 344 millones de dólares que el comprador de Telmex pagó por el segundo paquete accionario de la empresa, y que al revisarse la cuenta pública de 1994 en la Cámara de Diputados, no

aparecieron, aunque se dice que si se usaron para pagar deuda externa, una deuda que finalmente no disminuyó sino aumentó. Por su parte, la relativamente secundaria televisión estatal, al privatizarse y ser dejada en manos de personas sin experiencia pero con muy buenos contactos con la familia presidencial -como ya se vio por la peculiar relación financiera entre Raúl, el hermano del ex presidente Salinas y Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca y la cadena de tiendas Elektra-, no mejoró la calidad de su oferta sino que simplemente se conformó al patrón ya establecido de mediocridad y de apoyo al gobierno en su difusión de información política. Quizá es posible sostener que las aerolíneas si tuvieron un desarrollo positivo en materia de eficiencia al dejar en manos del Estado, pero el caso de Gerardo Prevoisin Legorreta (Aeroméxico) muestra que la corrupción puede seguir bajo las reglas de la empresa privada. La construcción y manejo de las carreteras en manos de empresas privadas, tampoco ha sido un gran éxito.

Petroquímica. Es en estas condiciones, el proceso de privatización de la industria petroquímica que el gobierno quiere llevar a cabo próximamente tiene un significado mayor que el 8 por ciento que representa el valor de los activos de PEMEX. La expropiación y nacionalización del petróleo fue una lucha intensa y larga -se inició bajo Madero y se concluyó con el acuerdo entre el gobierno de Miguel Alemán y la empresa petrolera "El Aguila". El objetivo era rescatar del capital y

de la influencia externas los recursos naturales no renovables y estratégicos de México. Se logró, y a partir de ese momento el petróleo representó la posibilidad de una cierta independencia económica y psicológica. Hoy ese margen de independencia ya se volvió a perder, pero mientras el petróleo se mantenga mexicano, la posibilidad de rescatarlo se mantiene.

Es justamente por el simbolismo nacionalista del petróleo, que actualmente está empantanada la venta de la petroquímica que hace tiempo planeó y decidió la alta burocracia. La privatización de esa parte de la industria petrolera mexicana simplemente no que caracteriza a la empresa pública de nuestro país -el sindicato petrolero la simboliza-, en teoría esta sería reversible bajo un régimen distinto al actual, pero difícilmente sería reversible ceder hoy a la propiedad de la gran productora de materias primas a otros favoritos del régimen, sobre todo si estos son extranjeros.

La Propiedad Pública. Para finalizar, vale la pena abordar el tema de la propiedad pública en general. En principio, no hay razón para que las empresas estatales sean diferentes de las particulares en materia de honestidad y eficiencia, y en cambio sí pueden ser mejores en cuanto a la socialización de sus ganancias y beneficios. Una empresa pública en un régimen realmente democrático, estaría vigilada por un Congreso y un Poder Judicial independientes. En esas condiciones -y a diferencia de la impotente comisión legislativa creada por la oposición para investigar las corrupciones en CONASUPO- se

podría detectar a tiempo y sancionar al mal administrador. Se puede argumentar que aún siendo honesta, la empresa pública es ineficiente por ser monopólica. pero esa característica también se puede eliminar dividiendo al monopolio o dejando entrar al campo y en igualdad de condiciones a la empresa privada, creando así la competencia y los incentivos para la efectividad.

En suma, el problema básico de la corrupción es la empresa pública de México no está en su carácter estatal, sino en el sistema de poder en que está inserta, y mientras ese sistema no se modifique la privatización no acabará con la corrupción, simplemente le da otra dimensión.